



Consejo Económico y Social

Distr. general
8 de julio de 2003

Original: español

Período de sesiones sustantivo de 2003

Ginebra, 30 de junio a 25 de julio de 2003

Tema 14 i) del programa provisional*

**Cuestiones sociales y de derechos humanos:
privacidad genética y no discriminación**

Información y observaciones aportadas por los gobiernos y las organizaciones internacionales y las comisiones orgánicas pertinentes en virtud de lo dispuesto en la resolución 2001/39 del Consejo Económico y Social

Informe del Secretario General**

Adición

Información y observaciones aportadas por los Estados Miembros

Argentina

1. Llega a esta Asesoría Letrada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) la nota que cursara la Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a fin de efectuar las correspondientes apreciaciones por parte del Organismo Consultante, en relación con la resolución 2001/39 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, titulada “Privacidad genética y no discriminación”.

2. El área toma particular atención de los siguientes documentos internacionales:

- La resolución 2001/39 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, titulada “Privacidad genética y no discriminación”;

* E/2003/100.

** La información contenida en esta adición se recibió después de la presentación del informe principal.



- La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;
 - La Convención de Derechos Humanos y Bioética del Consejo de Europa;
 - La Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 7 y 8).
3. Asimismo, considera la correspondiente legislación nacional:
- Ley No. 25.311 sobre la creación de datos genéticos;
 - Ley No. 23.592 sobre actos discriminatorios;
 - Constitución nacional y legislación afín a la temática en cuestión.
4. Finalmente, luego de haber solicitado la opinión al Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Educación, sobre la temática en cuestión y, analizado la presentación de dicho Comité con particular interés, el Instituto hace suya, sustancialmente, las conclusiones arribadas por la autora del informe, Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci por lo que dicho informe se incorpora al del Instituto, debiendo considerarse la postura allí señalada*.

Informe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la República Argentina

5. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en oportunidad de efectuar el presente informe y dejando sentada su expresa adhesión al propio del Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología, considera imperativo efectuar algunas apreciaciones básicas sobre varios temas puntuales.
6. El desciframiento de la secuencia del genoma humano ha incrementado la búsqueda de genes cuyas variantes o mutaciones no sean la causa directa de enfermedades sino que provoquen en un individuo una predisposición a aumentarlas o padecerlas, respecto de otros que no portan dichas variantes.
7. De esta manera se pretende establecer predicciones de riesgo de padecer enfermedades donde el determinante genético no es del 100%, sino que está condicionado por el tipo particular del ambiente (físico, biológico, externo y/o interno del organismo) en el cual se manifiesta la variante genética detectada. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, las autoinmunes, esquizofrenia, las depresiones bipolares, etc., enfermedades muy complejas donde lo genético puede tener cierto peso, pero está indefectiblemente condicionado por lo ambiental. Es que el fenotipo, es decir, lo que se ve de un individuo (su forma fisiológica y comportamiento) es consecuencia de la interacción del genotipo (los genes, el genoma) con el medio ambiente. Un genotipo dado podrá dar distintos fenotipos en diferentes ambientes, dentro de ciertos límites. El no tener en cuenta este concepto acarrea enormes problemas, de los cuales el más importante es el hiperdeterminismo genético, es decir, la preconcepción infundada de que todo está determinado por los genes y que habrá genes para todo. Genes para explicar la homosexualidad, la criminalidad, la dificultad de la corrupción, el aprendizaje, la inteligencia y ¿por qué no? la pobreza.

* El INADI salvaguarda su postura respecto a la utilización compulsiva de datos genéticos en procesos penales contra imputados pudiéndose vulnerar el principio de “Nemo tenetur armare adversarium contra se”.

8. *El peligro inmediato del desconocimiento de la variante ambiental conlleva al error de considerar acertado el determinismo genético, lo cual abre la puerta finalmente a la discriminación. Discriminar a alguien no otorgándole un seguro de vida o de salud o negándole un trabajo no en base a una certeza de que padecerá tal o cual enfermedad sino a la supuesta determinación de una cierta probabilidad de padecerla.*

9. En este contexto la privacidad de la información genética individual es un derecho que debería ser inalienable.

10. El hiperdeterminismo genético no sólo es la fantasía preponderante en la mayoría de la población, lógicamente ignorante de genética y de los procesos que intervienen en el desarrollo de la personalidad, sino lo que es más grave, aparece en el sustrato de la investigación clínica y farmacéutica moderna, que busca afanosamente las variantes de genes “asociadas” a enfermedades o disfunciones de base genética no comprobada. Se cree que esa investigación tiene una base errada y alimenta expectativas injustificadas en la población y en los inversores, ya que es poco probable que en la búsqueda de genes “responsables” tenga éxito en enfermedades cuyo carácter hereditario no haya sido previamente demostrado por la clínica. *El conocimiento del genoma no autoriza a nadie a estigmatizar al hombre como resultado irreversible de lo que ordenan sus genes. Los genes nos dicen que podemos hablar pero no qué idioma, que podemos apreciar música pero no cuál, que podemos amar pero no a quién.*

11. Los distintos tipos de inteligencia, las capacidades, los afectos y nuestros actos son resultado del proceso de culturización el cual no está registrado en ningún gen y está fuertemente influido por el ambiente familiar, social, y económico en que vivimos¹.

12. Asimismo, el INADI encuentra oportuno el presente informe para descartar cualquier pretensión biológica para comportamientos raciales. Nadie puede considerar a otra persona inferior a causa de su codificación genética; las legislaciones tienen que dar nuevos pasos que todas las personas sean tratadas de la misma manera, concepto incluido originariamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.

13. También es oportuno señalar que el ambiente cultural, tradicional, económico, educativo, climático, urbano, rural, familiar, etc. constituye una fuerte influencia sobre el desarrollo de un cierto tipo de inteligencia, independientemente de los genes que determinan caracteres tan ridículamente artificiales como el color de piel, etc. Si bien no es la capacidad de aprender y de razonar totalmente independiente de los genes, toda vez que, probablemente, la constitución genética de cada individuo sea bastante determinante para su desarrollo intelectual, esta afirmación sólo puede aceptarse si se tienen en cuenta las siguientes premisas: 1) en los humanos es mucho más difícil que en otras especies discriminar qué porción de un fenotipo es adquirida y qué porción es heredada, 2) aun si existieran variantes de genes que favorecieran y otras que desfavorecieran el desarrollo intelectual, no existe ninguna evidencia experimental de que las primeras estén más particularmente concentradas en un grupo humano y las segundas en otro.

14. Debe soslayarse que según el principio enunciado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a participar en los progresos científicos y en los beneficios que de ellos resulten. Asimismo, el

Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales establece similares principios en su artículo 15. Ello importa que en cuanto a los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de genoma humano, el acceso debe ser irrestricto y los Estados deberán, en un futuro, eliminar toda barrera, cultural, lingüística, etc. que restrinja la debida utilización del material genético para los fines que la legislación internacional sancione.

15. En relación con el derecho a la identidad, el INADI considera de particular trascendencia la incorporación normativa de la utilización de datos genéticos para la posible identificación del niño, en cuanto a su origen familiar, en cumplimiento con lo prescrito en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (“El niño ... tendrá derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”) así como el artículo 8 de la misma Convención, particularmente lo atinente a que los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño, preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ajenas. Asimismo, la segunda parte agrega que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Es por ello que el INADI entiende que todo avance en la legislación respecto a dicha temática, que preserve los principios expuestos, debe ser bien acogida por los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Informe del Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología

Introducción

16. En enero de 2003 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) solicitó opinión al Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología acerca de la resolución del 26 de julio de 2001 sobre “Privacidad genética y no discriminación” elaborada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

17. El Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología aceptó el caso y solicitó a Aida Kemelmajer de Carlucci² que actuara como relatora. En la segunda reunión plenaria del 2003, el Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología aprobó el informe de la relatora y las recomendaciones para el INADI.

Informe de la Relatora

18. La Relatora consideró oportuno realizar un análisis exegético del articulado de la resolución sobre privacidad genética y no discriminación del Consejo Económico y Social y su comparación con la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada el 11 de noviembre de 1997 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)³. La comparación de ambos textos resulta necesaria porque el Consejo Económico y Social es un órgano de las Naciones Unidas y, por lo tanto, el documento que propone no debe contradecir ni replicar al anterior; y al mismo tiempo, debe significar un progreso, al menos en la concreción de alguno de los principios elaborados para las áreas que son de competencia del Consejo.

19. Siguiendo esta metodología se procedió a comparar los párrafos 1 a 5 de la parte dispositiva de la resolución.

Párrafo 1 de la resolución

“Insta a los Estados a que garanticen que nadie sea objeto de discriminación debido a sus características genéticas.”

20. Este artículo se corresponde con el artículo 6 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos que dice:

“Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad.”

21. La palabra *garantizar* contenida en la resolución, parece expresar la intención de imponer a los Estados la obligación de asegurar la no discriminación por razones genéticas. Probablemente, esta intencionalidad surja del hecho de que la Declaración tiene, en principio, una fuerza menor a la de un *convenio* internacional, por lo tanto una previsión que obligue a los Estados a *asegurar* la no discriminación podría constituir un avance. Sin embargo, la inclusión del verbo *instar* deja las cosas en la misma situación en la que estaban.

22. La Declaración restringe la prohibición de la discriminación a que no se atente contra los derechos y libertades fundamentales. La resolución, en cambio, prohibiría todo tipo de discriminación, cualquiera sea el efecto.

23. Pero dado que la resolución es propuesta por el Consejo, el texto debería especificar en qué áreas vinculadas a la competencia de ese organismo opera la prohibición de discriminar.

24. Como conclusión provisoria debe señalarse que no se advierte la utilidad del artículo dado que la Declaración expresa el mismo principio de modo más adecuado.

Párrafo 2 de la resolución

“Insta también a los Estados a que protejan la vida privada de las personas sometidas a exámenes genéticos y a que aseguren que estos exámenes se lleven a cabo con el consentimiento previo, expreso y libre de la persona, dado con conocimiento de causa, o por medio de autorización obtenida como prescribe la ley y de acuerdo con el derecho internacional público y el derecho internacional en materia de derechos humanos.”

25. La norma está contenida en el artículo 5 de la Declaración, que dice:

a) Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional. b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada. Si ésta no está en condiciones de manifestarlo, el consentimiento o autorización habrán de obtenerse de conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del interesado. c) Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de los resultados de un examen genético y de sus consecuencias.

26. Del análisis de los textos surge que la expresión “*dado con conocimiento de causa*” contenida en la resolución no parece acertada. Tampoco resulta precisa la referencia a la ley. Consecuentemente, sería conveniente mantener una terminología aceptada y conocida, como es la de: “Consentimiento previo, suficientemente *informado* y libremente prestado de la persona sometida a examen. Si ésta no puede manifestarlo, la ley, teniendo en cuenta el interés superior del interesado, determinará el modo, como el consentimiento o la autorización puedan obtenerse”.

27. Este artículo podría referirse a la prueba genética con una fórmula tal como: “La ley determinará taxativamente los supuestos en los que, por ser media de prueba imprescindible, los exámenes pueden ser judicialmente ordenados; también preverá las consecuencias que puedan derivarse de la negativa injustificada a someterse a ellos”.

28. La incorporación de esta fórmula (u otra similar) tendría la virtud de: a) aludir a los supuestos en que los exámenes son impuestos por la ley como prueba en determinados expedientes judiciales; b) aclarar que se trata de supuestos excepcionales; c) requerir que la ley exprese las consecuencias que se pueden extraer de la negativa injustificada (por ejemplo, en un juicio de filiación, la ley considera a la negativa como un indicio grave contra quien se rehusa injustificadamente).

29. El Tribunal Constitucional de España, en decisiones Nos. 103/1990 y 22/1990 ha manifestado que:

“El derecho a la integridad no se infringe cuando se trata de realizar una prueba prevista por la ley y acordada razonadamente por la autoridad judicial en el seno de un proceso.

En esta clase de juicios se produce una colisión entre los derechos fundamentales de las distintas partes implicadas; no hay duda de que, en los supuestos de filiación, prevalece el interés social de orden público que subyace en las declaraciones de paternidad, en las que está en juego los derechos de alimentos y sucesorios de los hijos, objeto de especial protección por el artículo 39.2 o que trasciende a los derechos alegados por el individuo afectado, cuando está en juego además la certeza de un pronunciamiento judicial. Los derechos constitucionales a la intimidad y a la integridad física no pueden convertirse en una suerte de consagración de la impunidad, con desconocimiento de las cargas y deberes resultantes de una conducta que tiene una íntima relación con el respeto de posibles vínculos familiares.”

30. Para que no se vulneren los derechos constitucionales del afectado por la medida, se coincide en la necesidad de que:

a) El examen sea realizado por un profesional de la medicina en circunstancias adecuadas;

b) Debe existir una causa prevista por la ley que justifique la medida judicial de injerencia;

c) La evidencia no puede obtenerse a través de otros medios probatorios menos lesivos para la integridad física del demandado;

d) No podrá realizarse dicha prueba cuando pueda significar un grave riesgo o quebranto para la salud de quien tenga que soportarla;

e) La medida judicial debe guardar una adecuada proporción entre la intromisión que conlleva a la intimidad y la integridad física o moral del afectado por ella y la finalidad a la que sirve.

31. En la República Argentina, la ley 23.511 (1987) creó el Banco Nacional de Datos Genéticos con el fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación; pero el Banco cumple funciones más amplias; en general, a través del servicio de inmunología del Hospital Durand, realiza los exámenes genéticos que le requieran. El artículo 4 de esta ley dispone que “La negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el renuente”. La jurisprudencia nacional mayoritariamente tiende a convertir a esta negativa injustificada en una verdadera presunción contra el renuente.

32. La última frase del párrafo 2 de la resolución remite tanto al derecho internacional público como al derecho internacional en materia de derechos humanos, estableciendo un marco internacional para las facultades judiciales de las naciones.

33. En este contexto, la ley puede inferir consecuencias de la negativa al sometimiento, pero el sometimiento forzado es difícilmente concebible, sobre todo en procesos de naturaleza penal. La cuestión ha sido ampliamente discutida por la doctrina y la jurisprudencia. La Corte Federal argentina, después de algunas vacilaciones, ha aceptado esta prueba, rendida aún compulsivamente, en los procesos penales.

34. No cabe dudas de la pertinencia de la remisión al derecho internacional en materia de derechos humanos, sin embargo, no resulta clara la conveniencia de la remisión al derecho internacional público en general.

35. La ley argentina está limitada por el derecho internacional en materia de derechos humanos (artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

36. Según los argumentos expuestos, la frase analizada debería ser reemplazada por:

“En ningún supuesto los exámenes podrán ser realizados en violación a los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos.”

Párrafo 3 de la resolución

“Invita a los Estados a que adopten las medidas apropiadas, entre otras cosas mediante la legislación, para impedir que la información y los exámenes genéticos se utilicen de modo que las personas o miembros de su familia u otras personas con las que puedan compartir determinadas características genéticas sean objeto de discriminación o exclusión en cualquier esfera, en particular las esferas sociales, médicas o las relacionadas con el empleo ya sea en el sector público o el privado.”

37. La norma se corresponde con el artículo 7 de la Declaración que dice:

“Se deberá proteger la confidencialidad de los datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de investigación o cualquier otra finalidad, conforme las condiciones estipuladas por la ley.”

38. La resolución especifica la Declaración, pero quizás podría mejorarse la redacción.

39. La expresión “entre otras cosas mediante la legislación” parecería dar a entender que la ley es un medio excepcional de protección, cuando es precisamente uno de los primeros.

40. Se enuncian tres tipos de esferas: sociales, médicas o relacionadas con el empleo. Cabe preguntarse qué significado se otorga a lo “social”, como categoría excluyente. ¿Podría suponerse que lo médico o lo relacionado con el empleo está fuera de lo social?

41. En todo caso, sería preferible referirse concretamente al contrato de seguro, ámbito en el que nadie discute que puede haber discriminación con consecuencias extremadamente graves.

Párrafo 4 de la resolución

“Exhorta a los Estados a que promuevan, según corresponda, la elaboración y aplicación de normas que prevean una mayor protección de la reunión, el almacenamiento, la divulgación y la utilización de la información genética obtenida por medio de exámenes genéticos que pueda dar lugar a discriminación o a la intromisión en la vida privada.”

42. La norma parece distinguir dos tipos de acciones estatales: “elaboración” y “aplicación” de normas (adviértase que dice “según corresponda”). La expresión “elaboración” no es de uso corriente en el lenguaje jurídico y quizás debiera reemplazarse por “sanción”.

43. Es correcto que se mencione la vida privada. Quizás fuera conveniente incluir “vida privada o familiar”, pues las convenciones internacionales distinguen estos dos aspectos de la privacidad.

Párrafo 5 de la resolución

“Insta a los Estados a que sigan apoyando la investigación en la esfera de la genética humana y la biotecnología con sujeción a normas científicas y éticas aceptadas y teniendo presentes los posibles beneficios para todos, en especial los pobres, haciendo hincapié en que en esa investigación y en sus aplicaciones se deben respetar plenamente la dignidad humana, la libertad y los derechos humanos, así como la prohibición de todas las formas de discriminación basadas en las características genéticas.”

44. La norma está en la misma línea del artículo 17 de la Declaración, que dice:

“Los Estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para con los individuos, familias y poblaciones expuestos a riesgos particulares de enfermedad o discapacidad de índole genética. Deberán fomentar, entre otras cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las enfermedades genéticas o aquellas en las que interviene la genética, sobre todo las enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan a una parte considerable de la población mundial.”

45. El estilo gramatical de la norma parece menos cuidado que el de la Declaración (por ejemplo, comienza con el modo verbal “*que sigan apoyando*”; pero luego dice “*y teniendo presentes*”).

46. Es correcto que se mencione a los pobres, sin ningún tipo de eufemismo.

47. La última frase (*así como la prohibición de todas las formas de discriminación basadas en las características genéticas*) resulta redundante, en tanto reitera un concepto aludido en el resto de los artículos.

48. Es correcta la mención a la dignidad humana, concepto muy caro a la ética, pero debe advertirse la superioridad de la fórmula de la Convención de Derechos Humanos y Bioética del Consejo de Europa, que alude a la obligación de proteger la dignidad pero también la identidad de las personas. El texto europeo, que podría adaptarse a la resolución proyectada, dice:

“Las partes de esta Convención protegerán la dignidad y la identidad de todo ser humano y garantizarán a todos, sin discriminación, el respeto a su integridad y otros derechos y libertades fundamentales relativos a la aplicación de la biología y la medicina.

Cada Estado parte tomará, a través de su derecho interno, las medidas necesarias para dar efecto a las previsiones de esta Convención.”

Un tema omitido

49. Uno de los temas más problemáticos de la información genética es el vinculado a los beneficios económicos provenientes del patentamiento.

50. Se trata de un tema muy conflictivo que involucra intereses privados y genera grandes discusiones. Por estos motivos, el Consejo Económico y Social, tendría que encontrar una fórmula que incorpore el principio de justicia en el acceso a los beneficios y la protección frente a los riesgos en un tema que incide tanto en el área de su competencia.

51. La Declaración eligió una fórmula transaccional, que si bien no resulta totalmente conveniente para los países en desarrollo, incorpora su tratamiento. El artículo 4 de la Declaración dice:

“El genoma humano, en su estado natural, no puede dar lugar a beneficios pecuniarios.”

52. En resumen, la comparación de la resolución sobre la privacidad genética y no discriminación del Consejo Económico y Social, aprobada en 2001, con la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, aprobada por la UNESCO en 1997, sugiere las siguientes consideraciones:

a) El artículo 1 de la resolución debería especificar en qué casos opera la no discriminación en materia genética;

b) Respecto de la protección contra la discriminación genética, debe notarse que el artículo 6 de la Declaración expresa este concepto en un lenguaje más preciso y adecuado que el del párrafo 1 de la resolución;

c) El párrafo 2 de la resolución no sólo debería instar a los Estados a que protejan a los individuos que se sometan a exámenes genéticos, sino que también podría instar a los Estados a sancionar leyes que enumeren los casos excepcionales en los que un examen puede ser requerido judicialmente, aun sin el consentimiento del individuo;

d) La última parte del párrafo 2 de la resolución remite al derecho internacional público, pero sería más pertinente remitir al derecho internacional de los derechos humanos;

e) El párrafo 3 de la resolución debería incorporar una referencia concreta a la prohibición de discriminación en la esfera de los contratos de seguros;

f) El párrafo 4 de la resolución debería reemplazar la palabra “elaboración” por “sanción” que es más apropiada para el lenguaje jurídico;

g) El párrafo 4 de la resolución debería incluir no sólo la protección de la vida privada sino también de la vida familiar, dado que las convenciones internacionales distinguen estos dos aspectos de la privacidad;

h) El párrafo 5 de la resolución no sólo debería mencionar el respeto por la dignidad humana, sino también el respeto por la identidad de las personas;

i) La resolución omite el controvertido tema del patentamiento y los intereses privados vinculados con la información genética. Este problema debería ser contemplado porque es materia del Consejo y por las consecuencias y riesgos que implica.

Recomendaciones

53. Vistas las consideraciones, el Comité de Ética en la Ciencia y la Tecnología recomienda al INADI que llame la atención sobre las limitaciones, omisiones e insuficiente justificación de la resolución. En tanto no representa ningún avance respecto a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.

54. En particular, el Comité de Ética recomienda que el INADI advierta que en materia de prevención de la discriminación, la resolución:

a) No distingue de manera inequívoca los casos donde la privacidad de la información genética debe ser garantizada para evitar la discriminación de las personas (seguros, asistencia médica, situaciones laborales) y los casos donde la información genética es un instrumento para prevenir la impunidad y una contribución para el mejor cumplimiento de la justicia (casos penales, de identidad, de paternidad);

b) No trata el tema del patentamiento y de los intereses privados vinculados con la información genética, materia de incumbencia directa del Consejo y, por consecuencia, no incorpora instrumentos que habrían podido evitar la discriminación, la injusticia y la inequidad en el acceso a conocimientos beneficiosos para la humanidad.

Notas

¹ Alberto Kornblihtt, “La humanidad del genoma, el hombre y la biología molecular”, Encrucijadas, UBA, año 1, No. 5, marzo de 2001.

² Abogada y Doctora en Derecho. Miembro de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y Profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesora de la Universidad de París II y XII (Francia) y de Génova (Italia) y Profesora honoraria de la Universidad de San Marcos y San Martín de Porres (Perú). Conferencista en el país y en el exterior. Autora de numerosos libros sobre temas jurídicos. Premio Konex de Platino 1996.

³ En adelante la resolución del Consejo Económico y Social se denominará “resolución” y la palabra “Declaración” aludirá a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.
